

# Propiedad comunitaria y uso de la tierra rural de los Pueblos Originarios en la provincia de Santa Fe

Gabriela ALANDA

FCJS yFCA/UNL

**Eje temático:** *Políticas de tierras públicas*

## **Resumen:**

*La Provincia de Santa Fe cuenta con normativa relativa al reconocimiento de las comunidades aborígenes anterior al artículo 75 inciso 17 de la Constitución.*

*Tal circunstancia requirió algunas adecuaciones, además se sancionaron legislaciones referidas a la entrega de tierras rurales para su desarrollo como reparación histórica parcial especificando, expresamente, qué inmuebles rurales se hallan afectados por el destino legal impuesto.*

*Este trabajo demuestra el estado actual de la aplicación de la normativa y detallan las dificultades que se presentan en el territorio.*

*Nos preguntamos sobre las posibilidades de poder diseñar estrategias o programas de gobierno procurando que dos sectores rurales vulnerables -aborígenes y pequeños productores- puedan trabajar conjuntamente compartiendo riesgos y beneficios.*

*Se impone fomentar acciones de concienciación y construcción de capacidades para que los aborígenes y pequeños productores sean quienes ayuden a moldear el uso y manejo sustentables en la región, incluyendo todo tipo de actividades agropecuarias: ganadería, granja, apicultura, silvicultura y otros.*

## **1) Introducción**

Este trabajo tiene por objeto reseñar la legislación vigente en la Provincia de Santa Fe en materia de reconocimiento de las comunidades aborígenes y la entrega de tierras rurales para su desarrollo como reparación histórica parcial.

Se identifica la legislación específica en materia de tierras, el acceso a la misma por parte de las comunidades y el cumplimiento efectivo de la normativa a la vez que se detallan las dificultades que se presentan para cumplir con el cometido legal.

Finalmente, nos preguntamos sobre las posibilidades de poder diseñar estrategias o programas

de gobierno procurando que dos sectores rurales vulnerables tales como aborígenes y pequeños productores puedan trabajar conjuntamente compartiendo riesgos y beneficios.

Se impone fomentar acciones para la construcción de capacidades que les permita ser protagonistas y ayuden a moldear el uso y manejo sustentables de los recursos naturales en la región en donde se encuentran la tierras.

## **2) Ley de Política Aborígen**

La primera norma referente a la temática de los pueblos originarios en la Provincia es la Ley Nº 11.078<sup>1</sup>, se trata de una ley marco que fija el relacionamiento de los pueblos originarios y constituye el sistema jurídico provincial en la materia.

Regula la propiedad de la tierra, la cultura y educación, la salud, las viviendas, el nombre y de la documentación de las personas, la seguridad social y los recursos para implementar lo dispuesto por la normativa.

Reconoce las culturas y lenguas toba y mocoví como valores constitutivos del acervo cultural de la Provincia<sup>2</sup>.

Define a la comunidad aborígen como “el conjunto de personas que se reconozcan como tales, con identidad, cultura y organización propia, conserven normas y valores de su tradición, hablen o hayan hablado una lengua propia y tengan un pasado histórico común, sea que convivan nucleados o dispersos, en zonas rurales o urbanas.”<sup>3</sup>

Considera aborígen a toda persona perteneciente a las etnias que habiten el territorio provincial, sean de origen puro o mestizo y a toda persona que, independientemente de su residencia habitual, se defina como tal y sea reconocida por su familia, el asentamiento o comunidad a la cual pertenezca, en virtud de los mecanismos que la comunidad instrumente para su admisión.<sup>4</sup>

El Instituto Provincial de Aborígenes Santafesino<sup>5</sup>-IPAS- es autoridad de aplicación y ejecutor de

---

1 Sancionada 18 de noviembre de 1993, B.O. 04 de Enero de 1994. Artículo 1º: Esta ley regula las relaciones colectivas e individuales de las comunidades aborígenes de la provincia. Reconoce su propia organización y su cultura, propiciando su efectiva inserción social.

2 Artículo 26º de la Ley Nº 11078

3 Artículo 2º de la Ley Nº 11078

4 Artículo 3º de la Ley Nº 11078

5 El instituto depende del Ministerio de Desarrollo Social -ex Secretaria de Promoción Comunitaria-, está constituido por un Presidente (designado por el Poder Ejecutivo) y un Consejo integrado por cinco representantes de comunidades aborígenes. La elección de los Consejeros representantes de las comunidades aborígenes se hará en Asambleas de dichas comunidades de la Provincia de Santa Fe y será puesta a consideración del Poder Ejecutivo Provincial para su

las políticas elaboradas conforme a la misma. Como órgano asesor del instituto actúa la Organización de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Santa Fe -OCASTAFE-

Reconoce la existencia de Comunidades Aborígenes como simples asociaciones civiles, a las que les otorgará la personería jurídica, si así lo solicitan y en la medida en que cumplieren las disposiciones legales vigentes a cuyos efectos se deberán respetar las formas propias de organización tradicional de las comunidades aborígenes.<sup>6</sup>

Tal disposición ha sido considerada contradictoria con el paradigma normativo del artículo 75º inciso 17 de la Constitución Nacional<sup>7</sup>, y por ello necesaria su resignificación a la luz del texto constitucional que resulta operativo no solo para los poderes públicos sino entre particulares. Esta circunstancia ha quedado plasmada en la organización del Registro Especial de Comunidades Aborígenes (R.E.C.A.)<sup>8</sup>, que otorga el reconocimiento como persona jurídica de derecho público en los términos del artículo 33º primer párrafo del Código Civil.<sup>9</sup>

La inscripción tiene carácter declarativo, se efectúa por única vez, no tiene plazo de duración, vigencia o caducidad, es perpetuo extinguiéndose sólo por extinción de la comunidad.

Las comunidades registradas tendrán el reconocimiento de su propiedad comunitaria y podrán inscribir a su nombre la posesión y/o propiedad de sus tierras con las características de inembargables, imprescriptible, inenajenable y libre de impuesto en el Registro General de la Propiedad y Catastro<sup>10</sup>.

---

confirmación. Duran tres años en sus funciones y podrán ser reelectos. Para ser integrante del Instituto, se necesita: ser aborígen y ser elegido como representante de la propia comunidad, respetando sus modos propios.

6 Artículo 7º de la Ley Nº 11078 y agrega: “El reconocimiento de las comunidades como asociación no impiden que éstas puedan organizarse además en mutuales, cooperativas o cualquier otra de las formas permitidas por las leyes”

7 Artículo 75º: Corresponde al Congreso: inciso 17. *Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.*

8 El Decreto Nº 1175/2009 aprueba la reglamentación del artículo 7º de la Ley Nº 11078 y crea el Registro de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Santa Fe. Recordamos que a nivel nacional ya en 1996 y por Resolución Nº 4811/96 fue creado el Registro nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.)

9 Art. 33º del Código Civil Argentino. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1º. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. 2º. Las entidades autárquicas. 3º. La Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1º. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar. 2º. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.

10 Artículo 4º del Decreto Nº 1175/09, el artículo 6º establece los requisitos y procedimiento de registración

### **3- Acerca de la entrega de tierras**

Esta ley dispone que la adjudicación de tierras en propiedad se realizará cuando existan tierras fiscales, de manera gratuita, en forma comunitaria o individual según el interés de cada grupo o comunidad.

Se propenderá a que dichas tierras sean aptas y suficientes para el digno desarrollo de los mismos, así como que estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad o zonas cercanas, siempre, con el consentimiento libre y expreso de la comunidad<sup>11</sup>.

En caso de no existir tierras fiscales en la provincia se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad del Estado Nacional y/o Municipal y/o la expropiación de tierras aptas de propiedad privada cuando así se requiera.<sup>12</sup>

Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas, embargadas ni dadas en garantía, tampoco podrán ser divididas y no podrá existir sobre ellas ningún tipo de gravamen.

Las escrituraciones y mensuras serán gratuitas y realizadas por la Escribanía Mayor de Gobierno y Catastro, respectivamente.

Finalmente, no podrán ser usadas, explotadas, o alquiladas por personas ajenas a la comunidad o que no sean aborígenes<sup>13</sup>.

### **4- Sobre la normativa específica de entrega de tierras rurales a las comunidades**

La Ley Nº 12.086<sup>14</sup> autoriza al Ejecutivo a restituir, en carácter de reparación histórica parcial, bajo la forma jurídica de adjudicación que corresponda, a las Comunidades Aborígenes nucleadas por la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe –OCASTAFE- y otras comunidades, lotes e islas fiscales<sup>15</sup>.

La tierra fiscal cuyo destino legal es el expresado se halla identificada en el anexo I correspondiendo a tierra firme la cantidad de hectáreas: 1.537, el anexo II corresponde a islas fiscales la cantidad de hectáreas 53.739 hectáreas aproximadamente<sup>16</sup>.

---

11 Artículo 15º de la Ley Nº 11078

12 Artículo 19º de la Ley Nº 11078

13 Artículo 25º de la Ley Nº 11078

14 Sancionada el 28/11/2002, Promulgada el 26/12/2002, Boletín Oficial, 3 de enero de 2003.

15 Artículo 1º y 2º de la Ley Nº 12086

16 Cabe expresar que la cantidad de hectáreas de islas es aproximada debido a que están sometidas a grandes cambios en cuanto a extensión, ocurriendo en algunos el aumento en su superficie o la disminución e incluso la desaparición de la misma.

La Subsecretaría de Municipios y Comunas dependiente de la Secretaría de Estado General y Técnica de la Gobernación –hoy Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas<sup>17</sup>- es la autoridad de aplicación, siendo además quien administra los inmuebles incluidos en los anexos hasta tanto sean adjudicadas a las comunidades aborígenes beneficiadas<sup>18</sup>.

Crea una Comisión de Adjudicación conformada por representantes de dicho organismo, la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe -OCASTAFE-, los Municipios y Comunas en cuyo territorio se encuentren Comunidades Aborígenes, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto –hoy Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado-, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente –hoy Ministerio de Salud-, la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria – hoy Ministerio de Desarrollo Social-, y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable –hoy Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente<sup>19</sup>.

En tanto la Ley Nº 12.091<sup>20</sup>, denominada ley de tierras del norte santafesino, autoriza al Ejecutivo a desafectar veinte inmuebles fiscales remanentes de colonización<sup>21</sup>, disponiendo la donación de diez lotes a los ocupantes que acrediten con testigos su tenencia en forma compartida, por el término de tres años, con anterioridad al 31 de diciembre de 1997<sup>22</sup>, tres lotes para las comunidades aborígenes del Departamento Vera<sup>23</sup>, seis lotes se venden por el procedimiento de licitación pública<sup>24</sup>, y un lote se destina en usufructo para el Servicio Asistencial Médico Comunitario –SAMCo- de la localidad de Fortín Olmos.

## **5- Sobre la registración de las comunidades**

Antes de ser posible la entrega de tierras fue necesario que las comunidades se inscriban en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes –R.E.C.A.- cuyas características mencionamos en el punto segundo de este trabajo.

---

17 Ley de Ministerios Nº 12.817

18 Artículo 4º del Decreto 2876/2005

19 El funcionamiento de la comisión está reglado por el Decreto Nº 0813/07

20 Sancionada el 29/11/2002, Promulgada el 30/12/2002, B.O. 9 de enero de 2003

21 Los inmuebles quedan así desafectados del Régimen de Colonización establecidos por los Decretos- Ley 6.404, 6.659 y 7993 y sus modificatorios, los mismos se hallan ubicados en las Colonias Cuña Boscosa Santafesina y Las Gamas – Santa Lucía del Departamento Vera.

22 Estos lotes denominados predios de uso compartido ya han sido escriturados en 2010.

23 Estos lotes fueron escriturados a favor de las comunidades mencionadas el 11 de octubre de 2012.

24 El día 18 de septiembre del presente año se realizó la apertura de sobres de los oferentes a la compra de estos inmuebles fiscales.

Este registro desarrolla su función en colaboración y coordinación con otros registros provinciales y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas -RE.NA.C.I.-.

Para el caso de aquellas personerías jurídicas otorgadas en el marco de la Ley Nº 23.302<sup>25</sup> y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas<sup>26</sup> -I.N.A.I.- del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se procederá a inscribirlos en el registro, previa revisión, ordenamiento y depuración, si así correspondiere de dichas personerías jurídicas mediante convenio con el organismo nacional, en caso de ser así solicitado conforme los procedimientos, formas y contenidos establecidos en el decreto que crea el registro provincial.<sup>27</sup>

En la actualidad el registro funciona en la Dirección Provincial de Registros dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos<sup>28</sup>.

Según se puede apreciar en la página del gobierno provincial<sup>29</sup> se encuentran inscriptas<sup>30</sup> las siguientes comunidades: La Thee Palma de Berna; Natocoi de Florencia, Nueva Comunidad Mocoví - Dalaxaig Covó de Recreo, Qadhuoqté de Rosario; Qomlashi Lma Nam Qom de Santa Fe; Comcaia 'Somos Hermanos' de Recreo; Las Lomas de Santa Fe; Mosoq Paqarin de Firmat; Comcaiaripi de Calchaquí; Rahachaglate de Colonia La Lola Reconquista; Feliciano E. Ovelar de Santa Rosa de Calchines; Kami Iava de Paraje El Toba Vera; Mocovi Calle Ancha de Helvecia; Mocovi Doña Claudina Lanche de Colonia Mascias; Doña Jeronima Troncoso de Paraje Campo del Medio; Doña Carmen Juana Tasori del Paraje Campo del Medio; Llalec Lavac de Roque Colonia Duran; Corunda – Coronda de Coronda; Qar Ka la de Rafaela; Santa Teresita de Cayastá; Caiastas de Cayastá; Cacique Santo Sañudo de Helvecia; 2 de Febrero de Helvecia; Pedro José de Tostado; Noague Noa Nonot'I de Melincué; An Añaxas de Las Toscas.

---

25 Ley nacional de Protección de comunidades Aborígenes. Sancionada el 30/9/1985, B.O. 12/11/1985. La Provincia de Santa Fe adhirió por Ley Nº 10.375 del 12/10/1989.

26 Otorgó personerías en virtud de la Resolución Nº 4811/96

27 Artículo 6 del Decreto 1175/09

28 Artículo 2325/2012

29 <http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/117260/%28subtema%29/93808>, acceso 23/9/13.

30 La Comunidad Aborigen en su nota de solicitud de inscripción deberá consignar y acreditar los siguientes aspectos sustanciales: a) nombre de la Comunidad Aborigen; b) reseña de los elementos que acrediten su origen étnico-cultural e histórico con presentación de la documentación que así lo acredite; c) ubicación geográfica de la comunidad señalando, localidad, área de influencia y domicilio legal; d) descripción de sus pautas de organización y de los mecanismos de designación y remoción de sus autoridades; e) censo poblacional; nómina de los integrantes con grado de parentesco y mecanismos de integración y exclusión de sus miembros; f) nombre, apellido, número de Documento Nacional de Identidad y demás datos personales de los representantes de la Comunidad que hubieren sido designados de acuerdo a sus usos propios; Asimismo deberá integrar la presentación de la Solicitud de Registración un acta de reconocimiento, aprobación de las pautas de organización y designación de autoridades.

## 6- Sobre la entrega efectiva (real) de tierras

De la totalidad de los inmuebles rurales comprendidos en la legislación antes reseñada, a la fecha, se han escriturado los siguientes:

- 327 has a la comunidad Comcaia de Recreo correspondiente a la aplicación de la Ley Nº 12.086;
- 517 has distribuidas en tres lotes ubicadas en el Distrito Fortín Olmos del Departamento Vera, a las Comunidades Comcaiaripi “Somos Hermanos” de Calchaqui y Kami lava “Somos un Brazo” de Paraje El Toba Vera, correspondiente a la Ley Nº 12091.

En el resto de los inmuebles comprendidos en la Ley Nº 12.086 se han sucedido distintas situaciones por las cuales no ha prosperado el cumplimiento de la ley, entre ellos podemos citar:

- los inmuebles -tierra firme e islas fiscales- se hallan ocupados en algunos casos por generaciones de “criollos” no aborígenes por lo cual se genera un conflicto entre aquellos que por ley dispone la entrega y los que lo ocupan desde hace años<sup>31</sup>;
- La mayoría de los inmuebles, especialmente islas, no cuentan con mensura por lo tanto no es posible escriturar<sup>32</sup>,
- Existen familias aborígenes en el territorio santafesino que no se inscribieron aún en el R.E.C.A., y más aún se encuentran discutiendo, consensuando y organizando su constitución como comunidad.

## 7- Sobre las restricciones al uso por parte de personas no aborígenes

En un anterior trabajo dimos cuenta de la cosmovisión de los pueblos originarios en relación a la propiedad de la tierra, tan distinta a la occidental<sup>33</sup>.

De acuerdo al artículo 75º inciso 17 de la Constitución Nacional ninguna de las tierras será *enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos*.

---

31 Esta situación de conflicto ya fue advertida por Leonardo Pastorino al explicar la “Problemática indígena y su tratamiento constitucional” en PASTORINO, Leonardo F. *Derecho Agrario Argentino*, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pagina 107.

32 En algunas islas del Distrito Monte Vera y Cayastá la autoridad de aplicación –Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas- ha suscripto contratos de comodato con las comunidades hasta tanto se realice la mensura del inmueble.

33 *La cosmovisión de los pueblos originarios considera la naturaleza como un todo íntegro, no conciben la dominación de la misma. No es posible imponerles formas sustentables de producir pues tienen las suyas propias, ancestrales, donde prima un especial tipo de relación espiritual con el territorio que ocupan.* Alanda, Gabriela, “Algunas características territoriales, sociales, productivas y ambientales en la legislación para pequeños productores y comunidades aborígenes del Departamento Vera, Provincia de Santa Fe”, en Congreso Mundial de Derecho Agrario, Rosario-Paraná, 4 al 7 de noviembre 2008.

La Ley nacional Nº 23.302 expresa que los adjudicatarios (las comunidades) están obligados a “no vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de las autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos”<sup>34</sup>.

La ley provincial 12.086 dispone que las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas, ni dadas en garantía y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes<sup>35</sup>.

Frente al incumplimiento de las prohibiciones y condiciones aludidas, así como el abandono de las tierras adjudicadas o su ocupación por terceros cuando ella fuere consentida por los adjudicatarios, podrá solicitarse la restitución de la tierra, considerando además que existe abandono de la tierra cuando la persona y su familia se ausentaren ininterrumpidamente durante 2 años<sup>36</sup>.

Y la ley provincial 12091 dispone que la tierras donadas no podrán ser vendidas, ni dadas en garantía y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes. De igual manera estarán exentas del pago de impuestos y/o tasas de servicios de orden provincial, municipal o comunal<sup>37</sup>.

Advertimos que la norma de la Constitución Nacional no refiere al uso de la tierra, sí lo hace la legislación nacional (ley 23.304) permitiendo arrendar o transferir sus derechos con autorización de la autoridad de aplicación<sup>38</sup>, en tanto las leyes provinciales (Ley 12.086 y 12.091) resultan ser las más estrictas.

El fundamento de dichas restricciones se basa en el Tratado 24.071<sup>39</sup>, cuyo artículo 17 inciso 3 expresa: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

Pero también los incisos 1 y 2 del mismo artículo expresan: “1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos

---

34 Artículo 12º de la Ley nacional 23.302

35 Artículo 19 de la Ley Nº 12086, además el artículo 10 dispone: Las tierras adjudicadas estarán exentas del pago de impuestos y/o tasas de servicios de orden provincial.

36 Artículo 8º del Decreto Nº 2876/05 que remite al artículo 23 del Decreto Nº 155/89, advertimos que en la remisión del decreto provincial se ha producido un error de “pluma” consignado el Nº 115/89, en lugar del correcto.

37 Artículo 8º de la Ley Nº 12091.

38 La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- INAI-.

39 Aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Boletín Oficial, 20 de abril de 1992



interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”.

Los límites al uso y disposición, fomentados para evitar que sean abusados en su buena fe, resultan un “corset” para que las mismas comunidades puedan desarrollar actividades agrarias (y no agrarias) y requieren indefectiblemente asistencialismo.

### **8- Sobre las posibilidades de diseñar programas y estrategias para permitir la realización de proyectos productivos que integren comunidades aborígenes y pequeños productores**

En el anterior punto hemos visto las restricciones que imprimen las normativas, no obstante ello nos permitimos sugerir -previa modificación de la leyes provinciales citadas- la proyección de programas implementados por el gobierno provincial tendientes a posibilitar un desarrollo conjunto de ambos grupos vulnerables: las comunidades aborígenes y los pequeños productores sin tierras.

En relación a éstos últimos cabe referir que recientemente el Estado santafesino ha dictado el decreto<sup>40</sup> reglamentario de la Ley Nº 13.334<sup>41</sup> que impone la emergencia en materia de propiedad y posesión de la tierra rural y la suspensión de desalojos rurales por el término de cinco años.

La ley beneficia a los pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años, y además crea de un Registro de poseedores donde podrán inscribirse.

De acuerdo a lo establecido por la reglamentación a los efectos de la ley *“se entiende por pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos a aquellas personas físicas o que constituyen una sociedad de hecho, que residan en el predio o a una distancia no mayor de sesenta kilómetros del mismo, tengan un máximo de ingresos mensuales prediales netos de hasta diez canastas básicas, reciban un máximo de hasta el cincuenta por ciento de ingreso adicional mensual extrapredial (excluidos jubilaciones y/o pensiones mínimas, asignación universal por hijo, subsidio por desempleo u otros de igual carácter), y tengan hasta un trabajador permanente de prestación continua o discontinua excluyéndose los trabajadores temporarios conforme a la Ley Nº*

---

40 Decreto 2871 del 13 de septiembre de 2013

41 26 de diciembre de 2012. Boletín Oficial, 14 de enero de 2013.

26.727”

La ley 13334 también impone a la autoridad de aplicación –el Ministerio de la Producción- la elaboración de un Programa de Regularización Dominial<sup>42</sup> con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial.

Creemos que esta definición de pequeño productor -u otra que se elabore a tal efecto-, la declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra (Ley Nº 13334), sumado al imperativo del Estado para gestionar la aplicación de programas agropecuarios, forestales u otros con la debida prestación de asesoramiento técnico y capacitación para las comunidades (Ley Nº 11078) podría posibilitar el diseño de un programa integral de uso de la tierra rural en favor de estos dos sectores: aborígenes y pequeños productores.

El manejo de los sistemas donde generalmente están ubicados los lotes fiscales -humedales, bosques nativos-, supone una interacción compleja donde será necesario incluir personas, grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil para diseñar cuestiones técnicas, sociales y jurídico administrativas que permitan el monitoreo del funcionamiento del sistema a fin de fortalecer las iniciativas regionales y las nuevas formas de integración.

Esta actividad demanda por parte de todos los actores involucrados una gran comprensión del medio, del modelo económico y del desarrollo tecnológico.

Se impone fomentar acciones de concienciación y construcción de capacidades para que los aborígenes y pequeños productores sean quienes ayuden a moldear el uso y manejo sustentables en la región, incluyendo todo tipo de actividades agropecuarias: ganadería, granja, apicultura, silvicultura y otros.

A nuestro juicio el balance entre conservación y el uso de la biodiversidad se logrará a través de la toma conjunta de decisiones y mediante acuerdos de manejo supervisados por el Estado provincial.

---

42 Artículo 7º de la Ley Nº 13334. Son funciones del Programa de Regularización Dominial: a) realizar todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para articular los conflictos por tenencia precaria de la tierra; b) determinar los inmuebles rurales en situación de irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de antecedentes que resulten necesarios para solucionarlos; c) prestar asesoramiento legal para los pequeños productores, trabajadores rurales o campesinos que tengan problemas con su situación dominial; d) promover iniciativas de saneamiento de títulos de dominio sobre inmuebles rurales; e) articular con las Municipalidades y Comunas las estrategias conducentes a la detección, asesoramiento e intervención de casos sobre tenencia precaria de tierras rurales que presenten conflictos legales; f) coordinar las relaciones con las áreas gubernamentales comprometidas con la temática en cuestión y con los Juzgados Comunes; g) generar propuestas legislativas y ejecutivas conducentes al ordenamiento catastral y territorial; h) las que deriven en cumplimiento de la presente ley.

Corresponderá a los especialistas en derecho agrario el diseño de los modelos contractuales o instrumentos legales para compatibilizar los usos de la tierra rural a favor de ambos sectores.

Las nuevas figuras no deberán seguir los modelos típicos de contratos agrarios -arrendamiento y aparcerías- sino denominarse “contratos de producción” que sean útiles y eficaces para que las partes intercambien saberes, técnicas y costumbres que les permita desarrollar actividades agrarias conjuntamente compartiendo los riesgos y beneficios.